

**PROCEDIMIENTO:** Ordinario

**MATERIAS:** Despido Indirecto, Nulidad Del Despido y Cobro De Prestaciones

**DEMANDANTE:** José Daniel Aguilera Fuentes

**DEMANDADO:** I. Municipalidad De Chillan

**RIT:** O-309-2021

**RUC:** 21-4-0355284-1

-----/

**Chillán, veintidós de junio de dos mil veintidós.**

**VISTO**

Que comparece José Daniel Aguilera Fuentes, cesante, con domicilio en Arauco 331, oficina 22 del Edificio don Félix, comuna de Chillán, deduce demanda en Procedimiento de Aplicación General Laboral por despido indirecto justificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones laborales e indemnizaciones, en contra de I. Municipalidad de Chillán, Rol Único Tributario 69.140.900-7, cuyo representante es don Camilo Francisco Benavente Jiménez, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad número 6.508.267-8, ambos con domicilio en calle 18 de Septiembre N° 510, comuna de Chillán.

Solicita en definitiva declarar:

1.- Que ha existido relación laboral entre las partes de este juicio, la cual se extendió desde el 01 de abril de 2015 hasta el 27 de agosto de 2021.

2.- Que ha existido continuidad de los servicios prestados por la demandante a favor de la Municipalidad de Chillán desde el 01 de abril de 2015 hasta el 27 de agosto de 2021.

3.- Que concurre la causal alegada por despido indirecto, artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

4.- a.- \$485.648.- por concepto de indemnización por falta de aviso previo.

b.- \$2.913.888.- por concepto de indemnización por los años de servicio (6 años).

c.- \$1.456.944.- por concepto de recargo del 50% por causa del despido injustificado, según lo señala el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.

d.- \$469.460.- por concepto de remuneraciones correspondiente al mes de agosto de 2021.

e.- \$2.317.027.- Por concepto de feriado legal y proporcional.

f.- \$240.000.- Por concepto de horas extras trabajadas.



g.- Cotizaciones previsionales en AFP, FONASA Y AFC, por todo el periodo trabajado, esto es desde abril de 2015 a agosto de 2021.

Que se condena a la demandada al pago de las prestaciones indicadas en el cuerpo de esta demanda con reajustes e intereses, de acuerdo a lo señalado en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y/o las sumas que el Tribunal determine de acuerdo al mérito del proceso y las pruebas incorporadas a este juicio, todo ello con costas.

Que la demandada contestó la demanda.

Que con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, se lleva a efecto la audiencia preparatoria, compareciendo las partes. El Tribunal realiza la relación somera de la demanda y contestación, estableciendo hechos conformes, llamando a conciliación y procediendo a dictar la sentencia interlocutoria que fija los hechos a probar. Las partes en la oportunidad procesal pertinente ofrecen y exhiben su prueba, el Tribunal no decreta prueba y fija audiencia de juicio.

Que el día veinticinco de mayo del presente, se celebra la audiencia de juicio compareciendo las partes, se procede a recibir la prueba ofrecida, escuchándose las observaciones a la misma y se dicta fija fecha para la notificación de la sentencia definitiva.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO**

**Primero:** Que el demandante esgrimió como fundamentos los siguientes hechos.

##### **I.- EXPOSICIÓN CLARA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:**

Antecedentes de la relación laboral.

Comenzó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia a favor de la I. Municipalidad de Chillán a partir del día 01 de abril del 2015, y lo continuó haciendo, en forma ininterrumpida, mediante la suscripción de múltiples contratos de honorarios, pero que en realidad eran contratos de trabajo para prestar servicios en calidad de ayudante de maestro carpintero, albañil y soldador.

Entre los diversos contratos que celebró con la Municipalidad y de los cuales tengo antecedentes, indica:

1.- El de fecha 18 de mayo del 2021, con una vigencia desde el 01 de mayo hasta el 31 de julio de 2021.

2.- El de fecha 22 de julio del 2021, con una vigencia desde el 02 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2021.

Hace presente que celebre varios otros contratos, en promedio dos por año, y en los hechos trabajó de forma ininterrumpida desde el 01 de abril de 2015 hasta el 27 de agosto de 2021. Las labores contratadas por la I. Municipalidad de Chillán si bien por



contrato eran las de ayudante de maestro carpintero, albañil y soldador, en los hechos comprendían principalmente la de pintor, trabajo que desarrolló tanto en el taller dispuesto para ello, ubicado en Calle Sepúlveda Labbé 109, como de igual forma en terreno, en distintos puntos de la comuna a los cuales era enviado por órdenes de don Mario Parra Contreras. Para el desempeño de su labor el municipio le proveía del equipamiento necesario, herramientas, guantes, ropa de seguridad, brochas, pinturas, entre otros materiales necesarios.

Además de ello, debía realizar otras labores, pese a su ausencia en los contratos suscritos, es así que además de desempeñarse como pintor, ejerció labores como maestro albañil y carpintero, como jornal, debiendo ayudar cargar y descargar vehículos municipales, a medir y trazar, mover materiales, ayudar a hacer excavaciones, colaborar en la entrega de cajas de mercadería y todo cuanto le fuera indicado por su jefe.

En las oportunidades en que debía salir a terreno, señala que era trasladado, siempre, en vehículos que el municipio disponía para ello y las labores que realizaba eran supervisadas a diario por el jefe de don Mario Parra Contreras, debiendo cumplirlas dentro de una jornada de trabajo impuesta por el municipio, la que se distribuía durante la semana de lunes a viernes de 08:00 horas a 16:30 horas, pero además de ello se le hacía trabajar 5 horas extra en días sábados, en dos ocasiones al mes, generándose 10 horas extra mensualmente, situación que se repetía respecto de sus demás colegas, siendo algo habitual, pero de estas horas jamás se dejaba constancia.

La jornada diaria de trabajo fue registrada desde el inicio en un libro de asistencia el cual sólo señalaba el nombre del trabajador y se omitían los datos del empleador, esto con la única finalidad de esconder los antecedentes del vínculo laboral entre el municipio y quienes firmábamos dicho libro.

Las labores ya descritas las cumplió siempre bajo un vínculo de subordinación y dependencia, tanto de don Mario Parra Contreras, como del propio Alcalde de la comuna, existiendo un sinnúmero de indicios de laboralidad, los que le dan derecho a solicitar que el Tribunal, califique la relación de trabajo que lo unió con la I. Municipalidad de Chillán, como una de aquellas que se encuentra protegida y amparada bajo el marco normativo del Código del Trabajo, y por consiguiente correspondiéndole todos los derechos laborales que en dicho texto se contienen.

Relevante resulta al momento de calificar la relación de trabajo como laboral, la circunstancia de que el lugar y horario en que debía realizar su labor era siempre impuesto por el municipio, lo hacía en dependencias de éste, debiendo usar uniforme institucional, credencial, el municipio permitía hacer uso de licencias médicas para justificar inasistencias lo cual evidencia la obligación que tenía de asistir diariamente hasta los lugares impuestos por su empleador y dentro de los horarios por este señalados.

Por otro lado, el municipio les otorgaba el derecho a feriado anual de diez días hábiles, el derecho a poder faltar al trabajo en caso de fallecimiento de un familiar o



nacimiento de un hijo, el derecho a bono de fiestas patrias y navidad, derecho a asistir a capacitaciones con viático diario.

Respecto de las boletas de honorarios que debía emitir, al igual como ocurría con sus compañeros, señala que éstas las hacía un funcionario municipal de nombre Cristian Arroyo Romero, lo cual era parte de las instrucciones del municipio.

Es igualmente importante destacar que durante todo el periodo se desempeñó como funcionario a honorarios. Sin embargo, y de acuerdo al principio de la realidad, en los hechos lo unía un vínculo laboral que contemplaba todas las características de un contrato de trabajo cautelado por la legislación laboral.

## II.- PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES ADEUDADAS:

En virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos precedentemente, la demandada deberá pagar las siguientes prestaciones:

- a.- \$485.648.- por concepto de indemnización por falta de aviso previo.
- b.- \$2.913.888.- por concepto de indemnización por los años de servicio (6 años).
- c.- \$1.456.944.- por concepto de recargo del 50% por causa del despido injustificado, según lo señala el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.
- d.- \$469.460.- por concepto de remuneraciones correspondiente al mes de agosto de 2021.
- e.- \$2.317.027.- Por concepto de feriado legal y proporcional.
- f.- \$240.000.- Por concepto de horas extras trabajadas.
- g.- Cotizaciones previsionales en AFP, FONASA Y AFC, por todo el periodo trabajado, esto es desde abril de 2015 a agosto de 2021.

**Segundo:** Que, la demandada, contesta la demanda solicita el rechazo de la misma, con costas, basándose para ello en los siguientes antecedentes:

En cuanto al fondo del asunto propuesto a la resolución del Tribunal, solicita tener presente que controvertimos expresa y formalmente la versión de todos los hechos expuestos en la demanda, con excepción de aquellos que en el presente escrito de contestación fueran reconocidos en forma expresa.

En particular, controvierte:

1.- Que entre las partes hubiese existido una relación laboral basada en contratos de trabajo y regida por el Código Laboral y, por ende, la existencia de los incumplimientos graves que fundaron el autodespido objeto de la presente demanda.



2.- Que el demandante haya ingresado a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a partir del 1 de abril del año 2015, como afirma en su demanda.

3.- Que la cesación de los servicios específicos se haya producido por despido indirecto, ya que este solo es procedente en las relaciones laborales.

4.- Se controvierten todos y cada uno de los “supuestos indicios de subordinación y dependencia” indicados en la demanda, toda vez que, y a contrario sensu, la Municipalidad de Chillán en la contratación del demandante ha dado estricto cumplimiento al artículo 4° de la Ley 18.883, ya que don José Daniel Aguilera Fuentes fue contratado para prestar servicios no habituales, específicos y transitorios.

5.- Controvierte la naturaleza y monto de las remuneraciones que señala la demandante.

6.- Controvierte, asimismo, que sean procedentes y por tanto que se adeuden al demandante los conceptos y prestaciones reclamados en la demanda, como asimismo los montos reclamados, tales como indemnizaciones por años de servicio, recargos sobre esta última, horas extras, mes de aviso y cotizaciones previsionales.

Niega además que a la actora se le adeuden feriado.

8.- Niega la procedencia del pago de cotizaciones previsionales, dado que no existe título que faculte a la administración centralizada o descentralizada del Estado que coloque a esta última en la obligación de pagar, y además el demandante se obligó por contrato a enterar las sumas en las entidades correspondientes, y en estos casos la jurisprudencia más reciente señala que en el evento de que el demandante se obligue a esto, se rechaza que sea el empleador el encargado del pago de cotizaciones previsionales.

Con todo niega que exista deuda de cotizaciones de seguridad social que motivó el despido indirecto en esta causa.

9.- Niega y controvierte que resulte procedente y/o aplicable de la sanción de nulidad del despido, que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, dada la ya señalada ausencia de título que habilite a la Municipalidad para pagar.

Debido a lo anterior no procede la acción ni las prestaciones reclamadas en el libelo, debiendo ser rechazado en todas sus partes con costas.

**INEXISTENCIA DE UN VÍNCULO LABORAL ENTRE EL DEMANDANTE Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN.-**

**A.- LOS CONTRATOS A HONORARIOS SUSCRITOS ENTRE LAS PARTES NO CONSTITUYEN UN VÍNCULO LABORAL BAJO SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA.**



La relación contractual entre el demandante y la demandada se enmarca en la hipótesis contemplada en el artículo 4° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, así está establecido en el Numeral NOVENO del contrato de honorario acompañado conjuntamente con la demanda por la parte contraria, y que faculta a la Autoridad para contratar en base a honorarios para desempeñar cometidos específicos.

Dentro de este marco, el demandante se encargó de cometidos específicos, determinados por los contratos honorarios respectivos. Además se señala expresamente en la cláusula primera del contrato “Atendida la naturaleza jurídica civil de este contrato, las partes declaran que no existirá vínculo de subordinación ni dependencia entre ellas”. Por lo anterior, entendemos que no es plausible considerar que la relación contractual que lo vinculó a la Municipalidad de Chillán era de aquellas reguladas por el Código del Trabajo, sino que se trató de genuinos contratos de honorarios, que encargaban servicios específicos autorizados expresamente por el artículo 4° de la Ley 18.883.

En la especie, según se acreditará en juicio, los rasgos de laboralidad no existen, toda vez que:

1.- En la especie no hay rasgos materiales ni funcionales que permitan la construcción de los indicios para tener por acreditado el vínculo de subordinación y dependencia, toda vez que no estaba sujeto a un marco disciplinario específico como ocurre con las contrataciones permitidas por el Código del Trabajo.

2.- De lo anterior se desprende que los contratos a honorarios que regularon los servicios del demandante tenían el carácter de especiales y particulares, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 4° de la Ley 18.883 “cometidos específicos”, esto es, preestablecidos o determinados, y no excluyentes y de tareas que no forman parte de aquellas que la Ley pone en el ámbito de las Municipalidades, es decir, no habituales.

3.- En definitiva, la demandante, ha desconocido la naturaleza misma de los principios que informaron la vinculación contractual que le unió con la Municipalidad de Chillán, por cuanto nunca existió el vínculo de subordinación y dependencia que pretende, el que no es aplicable a las relaciones entre la Municipalidad y su persona, en razón que dichas relaciones se encuentran sujetas a las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios que hace inaplicables las normas laborales para la materia sometida al conocimiento del Tribunal, pues sólo las permite de manera excepcional en los casos y bajo las condiciones que dicho cuerpo normativo expresa.

**B.- LOS SUPUESTOS INDICIOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA EXPUESTOS EN LA DEMANDA NO CONFIGURAN RELACIÓN LABORAL SOMETIDA AL CÓDIGO DEL TRABAJO.**

La demandante señala en su demanda que existen indicios para acreditar la relación de subordinación y dependencia indicando que si concurre alguno o alguno de los siguientes elementos estaríamos frente a una relación laboral:



(1) existencia de un poder de mando del empleador y la consecuente obligación del trabajador de obedecer tales órdenes;

(2) obligación de concurrir en forma habitual al lugar de trabajo o disponibilidad del trabajador;

(3) cumplimiento de un horario;

(4) continuidad en la prestación de los servicios;

(5) la supervigilancia, control, revisión y rendimiento de las funciones realizadas;

(6) integración del trabajador en la organización de la empresa;

(7) sometimiento al poder disciplinario del empleador;

(8) que el trabajo se desarrolle en beneficio de otra persona, y

(9) desarrollo del trabajo en el lugar indicado por quien lo solicita.

Para luego indicar que “estamos ante un trabajo típicamente laboral, por otro lado, de acuerdo a los antecedentes de hecho, se desprende que la organización y dirección del trabajo la realiza un tercero, en este caso el municipio referido, quien es responsable de la correcta y cabal ejecución del trabajo realizado” por lo que se entiende que está haciendo referencia única y exclusivamente a los elementos N° 1, 5 y 8, no bastando estos elementos para acreditar por si solos el régimen laboral que pretende la contraria.

C.- DEL HECHO DEL DESPIDO INDIRECTO Y SU IMPROCEDENCIA. Con fecha 27 de agosto del año 2021, la demandante toma la decisión de autodespedirse, fundado en incumplimientos graves por parte de mi representada de las obligaciones que impone el contrato Art 171, en relación con el Art 161 N°7 ambos del código del trabajo. Dichos incumplimientos consistirían en el no pago de cotizaciones de AFP, FONASA Y AFC, durante el todo el término de la supuesta relación laboral, no escrituración del supuesto contrato de trabajo, no pago de feriado legal y no pago de horas extras.

La causal que se refiere al pago de las cotizaciones de AFP, FONASA Y AFC, es el punto esencial a determinar en esta causa, concluir si correspondía o no a su representada pagar las cotizaciones previsionales de la demandante será la principal premisa a resolver por el tribunal. Señala desde ya, que dichos pagos no eran de obligación de su representada. Si se llega a establecer que dichas cotizaciones eran de obligación de la demandante se deja sin efecto la causal invocada por la actora, debiendo rechazarse la demanda inmediatamente. Comienza diciendo que dichos pagos son de cargo exclusivo de la demandante, es más, así quedó establecido en los respectivos contratos de honorarios entre las partes en sus cláusulas QUINTAS de los contratos de honorarios en ambos tipos distintos de servicios específicos, señalando “Será obligación única y exclusiva del prestador de servicios dar cumplimiento de lo establecido en la ley 20.255 y la ley 20.894 que establecen la obligatoriedad a partir del año 2018, sobre el



entero de las cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, salud y las imposiciones que dicha norma le impone para concretar tal cotización. Por lo tanto dicha normativa se entiende forma parte expresa del presente contrato para todos los efectos legales y contractuales”. Queda de manifiesto que la demandante tenía conocimiento de su obligación de pagar las cotizaciones antes señaladas por cuenta propia, ya que al firmar los contratos de honorarios se estaba obligando a hacerlo de esa manera, no pudiendo excusarse o achacarle responsabilidad a su representada respecto de dicha obligación. Tal como habíamos señalado precedentemente el Art 1545 del Código Civil señala que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, por ende, de existir incumplimiento del mismo en el caso particular fue de parte de la demandante, no de mi representada, razón por la cual dicha causal y única en la que se funda el despido indirecto debe ser desestimada.

**D.- RESPECTO DE LAS PRESTACIONES ADEUDADAS:**

D-1.-Indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo, feriado legal y proporcional, horas extras y recargo legal: Con respecto a estas prestaciones indica que son improcedentes ya que son prestaciones propias de las relaciones laborales, y como ya latamente se ha mencionado en lo precedente, la relación entre la demandante y su representada no puede considerarse de esta naturaleza, por ende han de ser rechazadas.

D-2.-Pago de cotizaciones previsionales y nulidad del despido: Con respecto a las cotizaciones previsionales me remito a lo señalado precedentemente.

La sanción de nulidad de despido prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo es inaplicable a los organismos públicos cuando la existencia de la relación laboral solo ha sido declarada en la sentencia, tanto porque va más allá del objetivo de la ley que instauró cuanto porque atenta contra el principio de legalidad del gasto que afecta a los organismos públicos.

Solicita en definitiva tener por contestada la demanda en los términos planteados y que en definitiva rechace la demanda en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

**Tercero:** Que no se establecieron hechos conformes y llamadas las partes a conciliación esta no se produce.

**Cuarto:** Que se establecieron como hechos controvertidos los siguientes:

1.- Efectividad de existir contrato de trabajo o relación laboral entre las partes. Fecha de inicio, término y clausulas esenciales del contrato de trabajo, debiendo acreditarse la remuneración mensual del trabajador para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo.





2.- En caso de acreditarse relación laboral, efectividad de haber incurrido la parte demandada en la causal de incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. Hechos y circunstancias que configuran la referida causal.

3.- En caso de acreditarse relación laboral, efectividad de adeudarse cotizaciones previsionales. En su caso, periodos y montos.

4.- Efectividad de adeudarse las demás prestaciones señaladas en la demanda.

**Quinto:** Que en orden a acreditar sus pretensiones la demandante rindió los siguientes medios de prueba:

**Documental:**

1.- Copia de la carta de despido indirecto emitida por el demandante a su ex empleador y a la inspección del trabajo.

2.- Copia de la comunicación de autodespido dirigida al jefe de la Inspección Provincial de Ñuble.

3.- Contrato de Prestación de Servicios entre I. Municipalidad de Chillán y el demandante, de fecha 18 de mayo y 22 de julio del 2021.

4.- Decreto Alcaldicio 5426/2021, del 18 de mayo de 2021.

5.- Decreto Alcaldicio 7532/2021, del 22 de julio de 2021.

6.- Set de 4 fotografías.

7.- Set de boletas de honorarios emitidos por el demandante durante todo el periodo trabajado para la demandada.

**Confesional:** Absolvió posiciones en representación de la demandada Richard Vicente Guzmán Fernández, quien señala que don José Daniel Aguilera Fuentes trabajó para la Municipalidad de Chillán desde abril de 2015 a agosto de 2021, para cumplir la labor de ayudante de maestro carpintero, albañil y soldador, fue prestador de servicios dentro de una cuadrilla para la ejecución de ciertas obras.

Desconoce si mediante la suscripción de los contratos durante el año 2021 se le permitía presentar licencia médica.

Al prestador de servicios se le asignan funciones y hay una persona que coordina esas funciones, que en este caso era un funcionario en calidad de contrata y se le asignan ciertas tareas, evidentemente dentro de sus funciones deben estar disponibles para cumplir con esas tareas que se le solicitan.



Los prestadores de servicios se contratan por labores, por lo tanto la disposición de tiempo es dependiendo de sus labores, al final del día lo que hay que ver es que se hayan cumplido las tareas, es más no marcan asistencia.

Desconoce si el actor recibió ropa institucional y credencial.

**Testimonial:**

1.- José Eusebio Aguilera Vásquez, quien juramentado en la forma legal y dando razón de sus dichos señala que trabaja en la Municipalidad de Chillán hace 6 o 7 años cumpliendo funciones de albañilería y carpintería o lo que le manden. Conoce al actor en el trabajo y porque es su hijo.

Aclara que el demandante trabaja de ayudante de maestro y también trabajó en la Municipalidad, específicamente en los corralones, allá era ayudante, pintaba, descargaba camiones, entre otras cosas.

Señala que en las mañanas inician su trabajo en los corralones y allí les designan las partes en las que tienen que trabajar.

Las funciones del actor eran de pintor, descargaba camiones y ayudante de soldador. También sabe que tenía un jefe que se llama Mario Parra, ello le consta porque trabajaban juntos, vio al señor Parra dándole órdenes al demandante, por ejemplo le decía que tenía que trabajar los sábados y les daba órdenes para salir trabajar asignándoles las funciones tanto en poblaciones como en la sede.

No tenían lugar específico para trabajar ya que los mandaban un día a una parte y otro día a otro lugar.

El actor tenía que firmar un libro de asistencia, lo sabe porque él también lo hacía y todos debían llegar en la mañana a firmar el libro en la entrada.

Refiere que todos tienen que emitir boletas para la Municipalidad porque están de honorarios, las boletas las hacía el secretario del jefe que era don Cristian.

Indica que les entregaron pantalones y zapatos.

Contrainterrogado señala que don Mario Parra les daba las órdenes del lugar en que debían salir a trabajar en la mañana y era el jefe quien les revisaba el trabajo verificando que todo quedara bien, a veces les hacían correcciones cuando no quedaban bien y tenían que hacerlo de nuevo.

El jefe fue quien les solicitó firmar el libro a la entrada y la salida, el horario del actor era de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.

Nunca les descontaron plata por atraso o inasistencia, desconoce si a su hijo lo amonestaron alguna vez. Indica que no les daban vacaciones, pero no sabe si su hijo lo



solicitó, refiere que les hacían contrato, pero no sabe si su hijo pidió que le hicieran contrato de trabajo.

2.- Frank Alejandro Lagos Landaeta, quien juramentado en la forma legal y dando razón de sus dichos señala que trabaja en la Municipalidad de Chillán desde el año 2018 cumpliendo funciones de pintor en el departamento de Obras Municipales. Conoce al actor porque fueron colegas, el demandante entró a trabajar como en el 2015 aproximadamente.

Señala que ellos debían cumplir trabajos en todos lados, llegaban a la base todos los días y cumplían labores diarias. La rutina de todos los días era llegar a la base a las 08:00 de la mañana, los derivaban a terreno o se quedaban ahí y cargaban camiones, aclara que la base está ubicada en calle Sepúlveda Labbé con Arturo Prat, pero desconoce la numeración.

Todos los días tenían que firmar un libro y vio al actor firmando libro porque tenían que hacer fila todas las mañanas para poder firmar.

Las funciones del demandante eran comunes a las de todos, por ejemplo, cargar los camiones, iban a terreno, pintaban rejas, sedes comunitarias, etc.

Tenían un jefe a cargo y también había jefes de cuadrilla, el primero era don Mario Parra. Señala que no solo a don Daniel le daban órdenes, a todos les decían lo que tenían que hacer y cuál era la rutina diaria. Las órdenes las recibían diariamente, por ejemplo, que debían ir a limpiar plazas, ir a pintar las sedes comunitarias, etc.

Don José tenía obligación de ir todos los días a trabajar porque tenían un horario que era de 08:00 a 17:15 horas.

Indica que al demandante y a todos les entregaron uniforme que consistía en zapatos, pantalones y poleras que tenían el logo de la Municipalidad.

Vio trabajar al actor los fines de semana, porque los citaban a veces los días sábado y si no iban quedaban mal, la persona que los citaba era el jefe don Mario Parra y además era él quien les exigía firmar el libro de asistencia tanto en la entrada como en la salida.

Tanto el actor como todos tenían que emitir boletas de honorarios y las hacía el encargado de administración en la parte de Obras Civiles que era don Cristian Arroyo.

Contrainterrogado señala que la Municipalidad descuenta sumas de dinero por atrasos o inasistencia incluso a don José Daniel, pero no recuerda el día exacto, pero siempre se comunicaban entre ellos cuando les pagaban a fin de mes y comentaban que les habían descontado.



Aclara que cuando no concurrían los días sábado podría considerarse para la renovación o no del contrato, porque cuando estaba don Mario Parra quedaban mal si no iban y no les quedaba otra alternativa que acatar.

En cuando a las vacaciones, señala que les daban días administrativos, por ejemplo, tenían que avisar con un día de anticipación para pedir permiso. El demandante solicitó días administrativos.

**Exhibición de documentos:**

1.- Todos los Contratos suscritos entre las partes del juicio relativo a los años 2015 al 2021 y los respectivos decretos alcaldicios que los aprueban. (Se exhibe)

2.- Libros de asistencia de la demandada respecto del año 2015 a 2021. (No se exhibe por no existir)

3.- Comprobante de vacaciones o cualquiera sea la denominación que se le haya dado a dicho registro. (No se exhibe por no existir)

**Oficios:**

1.- AFP Provida, quien adjunta cartola de pago cotizaciones previsionales de la cuenta de capitalización de don José Daniel Aguilera Fuentes, cédula de identidad número 16.734.810-6, por todo el período 2015 a 2021. (Se incorpora)

2.- FONASA, quien remite Certificado de cotizaciones, cuenta de cotizaciones obligatorias de don José Daniel Aguilera Fuentes, cédula de identidad número 16.734.810-6, por todo el período 2015 a 2021. (Se incorpora)

3.- AFC Chile II S.A. que contiene Certificado de cotizaciones, de don José Daniel Aguilera Fuentes, cédula de identidad número 16.734.810-6, por todo el período 2015 a 2021. (Se incorpora)

**Sexto:** Que por su parte la demandada rindió la siguiente prueba

**Documental:**

1.- Contrato de prestación de servicios de fecha 22 de julio del año 2021.

2.- Decreto Alcaldicio N°7532 que aprueba el contrato.

**Confesional:** Absolvió posiciones el demandante don José Daniel Aguilera Fuentes quien señala que prestaba servicios para la Municipalidad porque ellos les hacían el contrato, en su trabajo hacía de todo, cargaba camiones, cortaba fierros, soldaba y pintaba. Esas funciones las hacía desde el año 2015, al parecer desde el mes de abril.

Tenía obligación de asistir todos los días a la Municipalidad porque era un trabajo como todos, tenían horario de entrada a las 08:00 y salida a las 17:15, pero si no se tomaban la hora de colación podían salir a las 16:30 horas.



Solicitó hacer uso de vacaciones, pero no se las daban, solo les otorgaban días administrativos por si tenían que hacer algo. La solicitud de vacaciones se la hizo a si jefe directo don Mario Parra de forma verbal.

Refiere que exigió que le hicieran un contrato, pero no lo tomaban en cuenta. Un día les prometieron que pasarían a planta y eso sucedía les pagarían cotizaciones, pero no sucedió.

Firmó un contrato con la Municipalidad, pero no recuerda la cláusula referente a las cotizaciones previsionales.

#### **Testimonial:**

1.- Miguel Ángel Vergara Monsalves, quien juramentado en la forma legal y dando razón de sus dichos señala que conoce a las partes porque trabaja en la Municipalidad de Chillán desde el año 2012, sus funciones para la demandada son compras, contrataciones y diversos trámites administrativos.

El actor prestaba servicios a honorarios y su función era de maestro carpintero albañil para un programa que se llamaba “Mejoramiento de espacios públicos” y estaba destinado a la recuperación de espacios públicos como cierres perimetrales de juntas de vecinos, recuperación de barrios, limpieza de áreas verdes, construcción y reparación de sedes, etc.

El demandante no tenía obligación de cumplir horario, porque estaba contratado a honorarios, además había un coordinador que todos los días le daba los lineamientos generales de las tareas que tenían que hacer y a raíz de la expertiz para la que estaban contratados ellos salían durante el día a hacer sus labores.

Tiene entendido que al actor no se le descontó ninguna suma por atrasos o inasistencias porque estaba contratado a honorarios. En el caso de las cotizaciones previsionales, una cláusula del contrato dice que es obligación del prestador de servicios hacerse cargo de dichos montos.

Contrainterrogado señala que probablemente no conoce al actor porque hacía trabajo administrativo.

En el contrato hay varias cláusulas que establecen beneficios, pero tendría que tener uno a la vista para poder confirmar los días libres.

Al exhibir la cláusula sexta del contrato del actor del año 2021 señala que podía hacer uso de licencia médica más allá de señalar si podía o no asistir, porque al final dice que es para justificar inasistencia.

El contrato dice en una de sus cláusulas que los prestadores deben rendir un informe de sus labores y con eso el encargado del servicio emite otro informe que da fe



que se prestaron los servicios y con eso se inicia el proceso de la cancelación de los honorarios.

Desconoce si el actor podía presentarse a cualquier hora a trabajar.

**En cuanto a la excepción**

**Séptimo:** Que en cuanto a la excepción de incompetencia opuesta por la demanda y considerando lo evacuado por el demandante, es necesario recordar que el artículo 420 del Código del Trabajo en sus letras a) a la g), establece las materias que son de competencias en los Juzgados de letras del trabajo, debiendo tener presente que a estos tribunales se les ha entregado el conocimiento en asuntos de materia especial, esto es laborales, esto sería el trabajo entre subordinado dependiente y su calificación en sede laboral.

Que el objeto del presente juicio consiste en determinar la existencia de la relación laboral y en consiguiente si el vínculo que ha existido ha sido de este carácter, siendo dicha decisión, materia exclusiva de la competencia de este Tribunal, de acuerdo a la norma ya señalada, por lo que se rechazará la excepción planteada.

**En cuanto al fondo:**

**Octavo:** Que, analizando los hechos la causa, no existe controversia en la prestación de servicios bajo la modalidad de contrato de honorarios celebrado entre las partes, los que se extendieron desde 01 de abril de 2015 hasta el 27 de agosto de 2021. Lo que es concordante con la prueba documental exhiba e incorporada en juicio por las partes, correspondientes a todos los contratos suscritos entre las partes del juicio relativo a los años 2015 al 2021 y los respectivos decretos alcaldicios que los aprueban.

A través de los contratos celebrados antes individualizados, se establece que las labores del actor fueron contratadas en un principio, para la instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicio y otros, diferentes juntos de vecinos de lo comunidad, entre otros, para lo ejecución de proyectos de inversión FONDEVE, especificándose en los demás contratos que su función era de “ayudante, maestro carpintero, albañil y soldador”, e incluso en junio de 2020 se modifican sus funciones complementando la función original de ayudante de maestro carpintero, albañil y soldador, la obligación del prestador a estar en permanente disposición del servicio para cumplir con las funciones propias de la municipalidad de Chillán.

En cuanto al pago de los servicios, se estipula que la Municipalidad de Chillán se obliga a pagar por los servicios, una suma única total que se divide cuotas mensuales, debiendo el actor confeccionar informes mensuales y emitir la correspondiente boleta, lo que es concordante con el Set de boletas de honorarios emitidos por el demandante durante todo el periodo trabajado para la demandada.



Asimismo, la demandada, se obligaba a entregar un espacio físico, para el desempeño de sus funciones, además de vestuario, tales como chaqueta, uniforme, ropa de trabajo zapatos de seguridad etc. y medio de transporte en su caso.

Se establecen, además beneficios, como el uso de licencia médica, permisos hasta por 10 días hábiles durante todo el periodo de vigencia del contrato con goce del honorario pactada, pudiendo fraccionarse la suspensión en medios días, debiendo contar para hacer uso del beneficio de la autorización previa del director de la unidad correspondiente, el uso de permiso con goce de honorarios por máximo de tres días hábiles en caso de fallecimiento del cónyuge, hijo, padre o madre, permiso con goce de honorarios por un máximo de cinco días hábiles en caso de nacimiento de un hijo, beneficio de un bono de fiestas patrias y Navidad, concurrir a charlas y capacitaciones.

También, se estipula, que el director municipal en cuya unidad se reciba los servicios, será responsable y tendrá atribuciones para verificar y controlar el cumplimiento de la prestación de servicios, verificar y controlar la coherencia de la información que sustenta cada pago, ingresar a la dirección de administración y finanzas la documentación que sea necesaria y requerida para el efecto del pago de los honorarios, controlar y conceder los beneficios que se establecen, determinar la procedencia o necesidad, y tramitar los actos administrativos que permita la concurrencia del prestador de servicios.

**Noveno:** De esta forma, los hechos se encuentran claros, sin embargo, la discusión versa, sobre la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a las partes, es decir, si la relación de las partes contiene los elementos de subordinación y dependencia laboral, por lo tanto, regidas por el Código del Trabajo, o, por el contrario, como alega la demanda, esta se desarrolla a la luz de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883, por tratarse las funciones del actor, en “cometidos específicos”.

**Décimo:** Que el artículo 1° del Código del Trabajo dispone: “Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.



**Décimo primero:** Por su parte el artículo 4 de la ley 18.833, del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, señala “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se registrarán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

**Décimo segundo:** Que, al respecto, la Excelentísima Corte Suprema, en diversos fallos a uniformado la jurisprudencia, es así como en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, Rol 19.168-18, nuevamente resuelve en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural que se desempeña en una entidad perteneciente a la Administración del Estado – en este caso una Municipalidad– y ésta última, cuando su ejercicio no se encuentra en los términos de la normativa conforme a la cual se incorporó a la dotación del ente respectivo.

Que agrega en su considerando Décimo: “*Que, por otra parte, es importante tener en consideración que el contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual*”.

*Undécimo: Que los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquellas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquellas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.*





*Duodécimo: Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.*

*Decimotercero: Que, entonces, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.*

*Decimocuarto: Que tal decisión no implica desconocer la facultad de la Administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4 de la Ley N° 18.883, por la que no se vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado Código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4 siempre que el contrato a*



*honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado, pueda contar con la asesoría de expertos en asuntos precisos, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales.*

*Decimoquinto: Que es justamente la determinación de estos tópicos de especificidad y ocasionalidad que deben ser esclarecidos para después decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar qué son “labores accidentales y no habituales”, siendo aquéllas las que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.”*

**Décimo tercero:** Que, esta forma es necesario determinar si el actor prestó servicios, bajo subordinación de dependencia laboral, o, por el contrario, se encuadran dentro de la hipótesis del artículo 4 de la ley 18.883.

Que, de acuerdo a lo señalado por la Excma. Corte Suprema en la sentencia mencionada precedentemente (Rol 19.168-18), debe entenderse por cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.

**Décimo cuarto:** Del análisis de la prueba rendida en especial los contratos a honorarios celebrados entre las partes y prueba testimonial, se establece que el actor, prestó servicios de ayudante de maestro carpintero, albañil y soldador desde el 01 de abril de 2015 al 27 de agosto de 2021, en virtud de sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, es decir, por aproximadamente seis años.

De los mismos contratos, se acredita el pago por la prestación, además de contener indicios de subordinación y dependencia, tales como una prestación de servicios remunerada, dirección y fiscalización. Este elemento se plasma sin dudas al establecer las atribuciones del director municipal, señalando expresamente que verificara y controlara el cumplimiento de la prestación de servicios, la coherencia de la información que sustenta cada pago, ingresar a la dirección de administración y finanzas la documentación que sea necesaria y requerida para el efecto del pago de los honorarios, controlar y conceder los beneficios que se establecen, determinar la procedencia o necesidad, y tramitar los actos administrativos que permita la concurrencia del prestador de servicios.

Todo lo que es corroborado con la declaración de los testigos del demandante, quienes señalan contestes que el actor prestaba servicios como ayudante de maestro,



pintaba, descargaba camiones etc, que firmaba libro de asistencia, que tenía un jefe don Mario Parra, quien le daba las órdenes, y cumplía un horario. Además, le entregaban uniforme, lo que es concordante con las fotografías que se incorporan y la confesional del actor.

Se une a lo anterior, lo estipulado en el contrato celebrado en junio de 2022, por el cual, se complementan las funciones del actor, agregando expresamente que debe estar en permanente disposición del servicio, para cumplir con las funciones propias de la Municipalidad de Chillán.

Que la prueba confesional y testimonial de la demandada, no cambia lo razonado, en atención a que no aportan antecedentes que tengan la envergadura de contrarrestar los elementos de subordinación y dependencia analizados, precedentemente.

**Décimo quinto:** De esta forma, del análisis conjunto de las normas reproducidas y del carácter de los contratos de honorarios suscritos entre las partes, se concluye que la relación entre las partes, es una relación laboral, por acreditarse en juicio elementos de subordinación y dependencia, tales como indicios de cumplimientos de órdenes, fiscalización, supervigilancia, existencia de jornada, horario y pago mensual. Sin que se acredite, por el contrario que la función para la cual el actor fue contratado de las características de un cometido funcionario, al desarrollar labores permanentes por seis años.

**Décimo sexto:** Que, respecto al monto de la última remuneración devenga por el actor, se consideran las boletas de honorarios incorporadas, por lo que se concluye que el monto de remuneración mensual es \$485.648.

**Décimo séptimo:** En cuanto a la acción de despido indirecto, esta figura es definida por el profesor Luis Lizama como “la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, permitido por el Código del Trabajo, en los casos en que sea el empleador quien incurra en las causales disciplinarias señaladas en los números 1, 5 ó 7 del artículo 160”. De tal definición y de lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo se desprenden sus elementos o requisitos, cuales son:

a.- La voluntad del trabajador de poner término al contrato de trabajo fundado en el incumplimiento del empleador de ciertas obligaciones establecidas por el legislador.

b.- Que el empleador efectivamente haya incurrido en una causal subjetiva voluntaria de término de contrato de trabajo establecida por el legislador.

c.- El trabajador debe cumplir con las comunicaciones administrativas que la ley determina, con el objeto de informar al empleador y a la Inspección del trabajo su decisión de poner término al contrato de trabajo y ejercer la acción judicial dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la terminación.



**Décimo octavo:** Respecto al despido indirecto la parte demandante alegó que el empleador incurrió en la causal establecida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, cual es: “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato” debiendo tener presente que esta causal subjetiva y voluntaria constituye el motivo más generalizado de la caducidad del contrato de trabajo, puesto que siendo este instrumento de naturaleza bilateral, la causa de la obligación de una de las partes, es la obligación de la otra y violando un contratante cualquiera de las cláusulas del contrato, sean éstas expresas, tácitas o subentendidas, será causal suficiente para poner término al vínculo contractual. En legislador ha exigido para su configuración: el incumplimiento de una obligación contractual laboral y la gravedad de la misma, en cuanto a la gravedad exigida no es un concepto absoluto, que pueda estimarse en forma aislada, ya que su concurrencia debe ser determinada por el juez caso a caso, para su procedencia debe tratarse de conductas de relevancia, cuyas consecuencias sean serias.

De esta forma acredita en juicio a través de la comunicación de despido y comprobante de envío por correo que cumplió con las formalidades del auto despido, terminando la relación laboral con fecha 27 de agosto de 2017.

En cuanto a los hechos fundantes del despido, de acuerdo a la carta de despido estos corresponden:

“1.- La no escrituración de mi contrato de trabajo, pese a las numerosas solicitudes verbales para la escrituración de este, vulnerándose por tanto la normativa contenida en el artículo 9 del Código del Trabajo.

2.- El no pago de cotizaciones de Seguridad Social, AFP, Salud y AFC prestaciones que en cuanto su retención y pagos son exclusivamente de cargo del empleador en conforme al art. 3 inciso 2 de la ley 17.322, art. 19 del Decreto Ley 3500 y al art. 58 del Código del Trabajo.

3.- El no pago de feriado legal y proporcional durante el periodo trabajado en conforme al art. 67 del Código del Trabajo.

4.- El no pago de las horas extraordinarias”.

**Décimo noveno:** En cuanto al cumplimiento previsional y de salud, se incorpora prueba de oficio, correspondientes a certificados de cotizaciones de AFP Provida, AFC y Fonasa, antecedentes que dan cuenta que efectivamente la demandada no enteró cotizaciones.

Respecto al no otorgamiento del feriado, es carga del empleador acreditar el uso o su compensación, lo que no sucede en juicio, por lo que se considera que efectivamente se adeuda.

En lo que respecta a las horas extraordinarias, no existe prueba en juicio que permita concluir que estas efectivamente se realizaron.



También se acredita la falta de escrituración del contrato de trabajo

**Vigésimo:** En cuanto a la gravedad del incumplimiento, la jurisprudencia en reiterados fallos ha señalado que su configuración corresponde a los tribunales, quien deberá determinarla en el marco del análisis de las probanzas allegadas a la causa en conformidad a las reglas de la sana crítica y en armonía con las antecedentes labores del trabajador.

De esta forma, a juicio de esta sentenciadora, los hechos cometidos por la demandada, es decir, no enterar las cotizaciones previsionales y de salud, y la falta de otorgamiento de feriado por seis años, tal como se detalla en las comunicaciones de despido, y se acredita con los certificados correspondientes, son de la gravedad suficiente para configurar la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Que en atención a lo analizado es procedente acoger la acción por despido indirecto, debiendo la demandada pagar las indemnizaciones correspondientes y sus recargos.

**Vigésimo primero:** Que, respecto de la acción de nulidad, es necesario considerar, que el artículo 162 del Código del Trabajo, establece la forma de convalidación del despido, al señalar “Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago”.

Al respecto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido que la institución de la convalidación, no es aplicable a los órganos del Estado, en atención a que no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido”, de acuerdo a lo señalado la sentencia dictada en causa Rol 6.445-2018, asimismo en causa Rol N°16.650-2018, sentencia de reemplazo, caratulada Sandoval y otro con Ilustre Municipalidad de Pinto, que en lo pertinente señala:

“5°.- Que, no obstante fluir de los mismos antecedentes la mora previsional, al haberse controvertido por la parte demandada la naturaleza laboral del vínculo, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, pues al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de dicha punición, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se



desarrolla el proceso, tal sanción se desnaturaliza, por cuanto las municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio”

Los mismos argumentos son esgrimidos por este Excelentísimo Tribunal en SENTENCIA DE REEMPLAZO ROL 26.272-2018 de 30 de abril de 2019 caratulada “Arteaga con Ilustre Municipalidad de Pinto” la cual reitera en lo esencial:

“6°.- Que, en otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido”.

De esta forma, declarada la existencia de la relación laboral entre las partes, y a pesar de acreditarse con los certificados y oficios, la inexistencia del pago de cotizaciones, no es procedente la acción de nulidad de despido, respecto de los organismos del Estado, en atención a que no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, en atención a que requieren de sentencia condenatoria, como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema.

**Vigésimo segundo:** En cuanto al feriado reclamado, es cargo de la demandada acreditar que efectivamente fue otorgado o compensado, lo que no sucede en juicio.

Lo mismo, respecto de la remuneración del mes de agosto de 2021, respecto de la cual, no existe antecedente en juicio que pruebe el pago, pesando sobre la demandada la prueba, por lo que será condenada al pago estas prestaciones.

Respecto de las horas extraordinarias reclamadas, no existe en juicio antecedente que permita concluir que efectivamente el actor realizó estas horas, por lo que se rechaza esta prestación.

**Vigésimo tercero:** Que el resto de la prueba, no cambia lo razonado, siendo toda analizada de acuerdo a las normas de la sana crítica, según lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1°, 7, 160, 168, 450, 453, 454, 456 y 459 del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil, **SE RESUELVE:**

**I.- Que, SE RECHAZA, con costas, la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.**

**II.- SE DECLARA LA EXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES, desde el 01 de abril de 2015 al 27 de agosto de 2021.\_**



**III.- Que, SE ACOGE, con costas, la DEMANDA POR DESPIDO INDIRECTO Y COBRO DE PRESTACIONES, interpuesta por JOSÉ DANIEL AGUILERA FUENTES, en contra de I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN, representada por CAMILO FRANCISCO BENAVENTE JIMÉNEZ.**

Debiendo pagar la demandada al actor las siguientes prestaciones:

1.- La suma de \$485.648.- por concepto de indemnización por falta de aviso previo.

2.- La suma de \$2.913.888.- por concepto de indemnización por los años de servicio (6 años).

3.- La suma de \$1.456.944.- por concepto de recargo del 50% dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo.

4.- La suma de \$469.460.- por concepto de remuneraciones correspondiente al mes de agosto de 2021.

5.- La suma \$2.317.027.- Por concepto de feriado legal y proporcional.

**IV.-** Que la demandada deberá pagar las cotizaciones previsionales y de salud del periodo de abril de 2015 a agosto de 2021

**V.-** Que las sumas ordenadas pagar se reajustarán en la forma dispuesta en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

**VI.-** Oficiese a las instituciones de seguridad social FONASA, AFP PROVIDA Y AFC y al Ministerio Público para los fines que estime pertinentes, una vez que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese en la fecha fijada al efecto y oportunamente archívese.

**RIT: O-309-2021**

**RUC: 21- 4-0355284-1**

**Dictada por Juez(a) Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.**



